

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. 579.

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76001-3333-001-2021-00011-00
EJECUTANTE:	MARÍA DEL SOCORRO DIAZ BERNAL Y OTRO
EJECUTADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

I. ANTECEDENTES.

Revisada la demanda se encuentra que las señoras MARÍA DEL SOCORRO DÍAZ BERNAL y JAIRA MARÍA CASTRO DÍAZ mediante apoderada judicial, instauran demanda ejecutiva en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, para que previos los trámites de ley se libre mandamiento de pago a su favor de acuerdo en lo ordenado en la sentencia de 7 de septiembre de 2015 proferida en primera instancia por este Juzgado y la sentencia del 21 de febrero de 2018 expedida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2014-00163-00.

Adicionalmente, la parte ejecutante pretende el pago de los intereses de mora generados por la falta de pago oportuno de la obligación y de las costas procesales impuestas a su favor en la sentencia de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES.

1. Título ejecutivo fundamentado en una sentencia judicial.

De acuerdo a lo estipulado por el numeral 6¹ del artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene competencia para conocer los procesos *“ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción”*.

Adicionalmente, el artículo 297 del CPACA, estipula que constituyen título ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad al pago de sumas dinerarias.

¹ 6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.

Igualmente prevé el numeral 2 del artículo 114 del CGP que *“las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria”*.

En el presente caso, el proceso ejecutivo resulta procedente para obtener el cumplimiento de la obligación existente a favor de las accionantes, toda vez que el título de ejecución se ajusta a los parámetros normativos expuestos y corresponde a la sentencia de 7 de septiembre de 2015 proferida en primera instancia por este Juzgado y la sentencia del 2 de febrero de 2018 dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2014-00163-00 las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas.

2. Exigibilidad de las sentencias de condena contra entidades públicas.

El artículo 192² del CPACA, establece que las condenas impuestas a entidades públicas que impliquen el pago o devolución de una suma de dinero deben cumplirse en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

En el caso bajo estudio la sentencia de segunda instancia que integra el título ejecutivo quedó ejecutoriada el 27 de febrero de 2018³. En consecuencia, se advierte que la obligación determinada a favor de la parte ejecutante es actualmente exigible toda vez que el término concedido en la ley procesal a la entidad pública accionada para dar cumplimiento a la condena se encuentra cumplido.

3 competencia.

Conforme lo establece el numeral 9 del artículo 156 del CPACA, la competencia para conocer de la ejecución de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, radica en el Juez que profirió la providencia en primera instancia dando prevalencia al factor de conexidad.

En el presente caso, este Juzgado es competente para dar trámite a la ejecución toda vez que profirió la sentencia de primera instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2014-00163-00.

² Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.

³ Según constancia secretarial obrante a folio 94 del archivo PDF que contiene la demanda ejecutiva.

4. Procedimiento.

De acuerdo a remisión expresa que consagra el artículo 306⁴ del CPACA y a los parámetros establecidos por el precedente del Consejo de Estado⁵, en los aspectos no regulados, los procesos ejecutivos que se presenten ante esta jurisdicción se deben tramitar conforme a las reglas establecidas por el Código General del Proceso.

5. Caso concreto.

5.1. Naturaleza de la obligación reconocida en el título base de la ejecución.

El artículo 422 Código General del Proceso, establece los requisitos que debe cumplir el documento a través del cual se pretende que se libere mandamiento ejecutivo, a saber: i) Que se trate de documento o documentos auténticos, que conformen una unidad jurídica, ii) Que emanen de actos o contratos del deudor o causante (títulos contractuales), o de una sentencia de condena proferida por el juez (títulos judiciales), etc., y iii) Que en dicho documento aparezca, a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, una obligación **clara, expresa y exigible**.

De este modo, es claro que al momento de librar mandamiento ejecutivo, el Juez debe examinar si, el título presentado como base del recaudo contiene una obligación **inequívoca**, esto es, fácilmente inteligible y entendible, así como **expresa** en cuanto al crédito del ejecutante y la deuda del ejecutado y, finalmente **exigible**, es decir, que la misma pueda demandarse por no estar sometida a plazo o condición, o de lo contrario, que el término para su cumplimiento ya se encuentre vencido.

Por tanto, tratándose de títulos ejecutivos, el Consejo de Estado ha expresado que éstos pueden ser simples, cuando la obligación se consagra en un solo documento, o complejo, cuando el mismo lo constituyen varios documentos, como sucede por regla general con el cobro ejecutivo de obligaciones derivadas de contratos administrativos o sentencias judiciales, en las cuales, el título generalmente lo conforma la providencia y su acto administrativo de cumplimiento⁶.

De esta manera, es importante indicar que cuando la obligación se encuentra contenida en una decisión judicial, generalmente el título ejecutivo es complejo, ya

⁴ Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

⁵ En providencia de 27 de abril de 2020, proferida dentro del radicado Radicación número: 05001-23-33-000-2019-00707-01(65427) la Sección Tercera del Consejo de Estado ratificó la aplicabilidad del CGP a los procesos ejecutivos tramitados ante esta jurisdicción en los siguientes términos:

“Por virtud de la integración normativa y supletiva que contempla el artículo 299 y la remisión expresa que consagra el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, las reglas aplicables a los asuntos ejecutivos que se tramitan en esta jurisdicción son las contempladas en Código General del Proceso, salvo que exista norma expresa en la Ley 1347 de 2011 que reglamente la situación procesal que se presenta en el caso particular, como ocurre frente a las medidas cautelares o frente a los presupuestos de jurisdicción y competencia (artículo 299 de la Ley 1437 de 2011)”.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia del 1 de octubre de 2008, Expediente No. 26.706, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

que estará conformado por la copia auténtica de la sentencia, con las respectivas constancias de notificación y ejecutoria, y por el acto administrativo con el que la Administración pretende dar cumplimiento a lo ordenado en ésta⁷; evento en el cual, la demanda ejecutiva se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta, no obstante, el Consejo de Estado ha indicado que, excepcionalmente el título ejecutivo será simple, cuando el mismo lo constituye únicamente la sentencia, al no haberse dado cumplimiento a la misma⁸.

A partir de lo anterior, es pertinente precisar que en el caso concreto se está frente a un título simple en consideración a que además de las sentencias de primera y segunda instancia contentivas de la obligación, no existe un acto administrativo de cumplimiento, mediante el cual la entidad accionada haya reconocido la obligación determinada en la condena impuesta en su contra.

En efecto, en el numeral 3 de la sentencia de 7 de diciembre de 2015, que fue confirmado en su integridad por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de segunda instancia de 21 de febrero de 2018, se impuso a la Policía Nacional una obligación de hacer consistente en la expedición de un acto administrativo de reconocimiento pensional a favor de las accionantes, en los siguientes términos:

(...) TERCERO: ORDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, a título de restablecimiento del derecho, proferir acto administrativo disponiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora MARÍA DEL SOCORRO DÍAZ BERNAL, en calidad de cónyuge supérstite del causante a Jair Castro Ocampo Y de JAIRA MARÍA CASTRO DÍAZ en su calidad de hija, a partir del 30 de mayo de 2010, de conformidad con los lineamientos señalados en la parte motiva de esta providencia y haciendo claridad, que respecto de la hija esta se causará hasta cuando se acredite los requisitos que establece el artículo 47 de la ley 100 de 1993, evento en el cual la pensión deberá acrecentarse a favor de la señora MARÍA DEL SOCORRO DÍAZ BERNAL, en el porcentaje que esta deje de percibir. De igual forma deberá efectuarse la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud al grupo familiar del causante, de conformidad con la ley (...)

CUARTO: Las sumas a las cuales fue condenada la entidad demandada deberán ajustarse tomando en cuenta el índice de precios al consumidor, de conformidad con lo señalado en el inciso final del artículo 187 del CPACA a hasta el momento de la ejecutoria de esta providencia, en la forma como se indica en la parte considerativa de esta sentencia.

Partiendo del hecho de que la sentencia transcrita se estableció una obligación de hacer y que ésta consiste en el reconocimiento de una prestación periódica de conformidad con los artículos 426⁹ y 433¹⁰ del Código General del Proceso, la

⁷ Consejo de Estado, Sección Cuarta, Providencia del 26 de febrero de 2014, Expediente No. 19250, Consejera Ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

⁸ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 02 de abril de 2014, Expediente No. 1002-14, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

⁹ Artículo 426. Ejecución por obligación de dar o hacer. Si la obligación es de dar una especie mueble o bienes de género distinto de dinero, el demandante podrá pedir, conjuntamente con la entrega, que la ejecución se extienda a los perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, para lo cual estimará bajo juramento su valor mensual, si no figura en el título ejecutivo.

De la misma manera se procederá si demanda una obligación de hacer y pide perjuicios por la demora en la ejecución del hecho.

¹⁰ Artículo 433. Obligación de hacer. Si la obligación es de hacer se procederá así:

1. En el mandamiento ejecutivo el juez ordenará al deudor que se ejecute el hecho dentro del plazo prudencial que le señale y librára ejecución por los perjuicios moratorios cuando se hubieren pedido en la demanda.

parte ejecutante solicita que se libre mandamiento ejecutivo en los siguientes términos:

Se ordene a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional que profiera un acto administrativo por medio del cual se reconozca una pensión de sobrevivientes a favor de la señora MARÍA DEL SOCORRO DÍAZ BERNAL, en calidad de cónyuge supérstite del causante JAIR CASTRO OCAMPO y de JAIRA MARÍA CASTRO DÍAZ en calidad de hija, a partir del 30 de mayo de 2010.

A título de perjuicios moratorios, derivados del incumplimiento de la obligación de hacer referenciada, bajo la gravedad del juramento se solicita que se ordene a la entidad accionada el pago de las siguientes sumas de dinero:

- Setenta y nueve millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos cinco pesos (\$ 79.358.705), correspondientes al valor de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el 30 de mayo de 2010 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia el 27 de febrero de 2018.
- Treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil noventa y dos pesos (\$ 32.458.092) correspondiente a las mesadas pensionales que la entidad ejecutada adeuda a las accionantes, desde el 28 de febrero de 2018, hasta la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva.
- Seiscientos cincuenta y tres mil setecientos seis pesos (\$ 653.706) que corresponden a las costas ordenadas en los fallos de primera y segunda instancia aprobadas mediante auto de 8 de agosto de 2018.
- Por el valor de las mesadas pensionales que se causen desde la presentación de la demanda ejecutiva hasta el cumplimiento total de la obligación.
- Por los intereses moratorios causados desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta al momento en que se produzca el pago total de la obligación.

5.2. Procedencia del mandamiento ejecutivo.

En el presente caso resulta procedente acceder a la solicitud de mandamiento ejecutivo presentada por la parte accionante toda vez que se cumplen los parámetros establecidos en los artículos 426 y 433 del Código General del Proceso para la ejecución de una obligación de hacer.

2. Ejecutado el hecho se citará a las partes para su reconocimiento. Si el demandante lo acepta, no concurre a la diligencia, o no formula objeciones dentro de ella, se declarará cumplida la obligación; si las propone, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo anterior.

3. Cuando no se cumpla la obligación de hacer en el término fijado en el mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido en subsidio el pago de perjuicios, el demandante podrá solicitar, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de dicho término, que se autorice la ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor; así se ordenará siempre que la obligación sea susceptible de esa forma de ejecución. Con este fin el ejecutante celebrará contrato que someterá a la aprobación del juez.

4. Los gastos que demande la ejecución los sufragará el deudor y si este no lo hiciere los pagará el acreedor. La cuenta de gastos deberá presentarse con los comprobantes respectivos y una vez aprobada se extenderá la ejecución a su valor.

En efecto, la parte accionante solicita el cumplimiento de la obligación de hacer reconocida en la sentencia de 7 de diciembre de 2015 y 21 de febrero de 2018 consistente en que la Policía Nacional expida un acto administrativo por medio del cual reconozca la pensión de sobrevivientes a partir del 30 de mayo de 2010, más los perjuicios moratorios que corresponden a las mesadas que no han sido pagadas hasta la fecha de presentación de la demanda y los correspondientes intereses moratorios.

Adicionalmente se advierte que la determinación de los perjuicios moratorios encuentra respaldo en lo demostrado dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-33-33-001-2014-0016300, en el cual se corroboró que el causante del derecho laboró como Agente de la Policía Nacional desde el 18 de noviembre de 1986 hasta el día de su fallecimiento el 22 de febrero de 1996.

De conformidad con la hoja de servicios N° 167226696, la cual obra en el expediente del proceso ordinario, para el momento del fallecimiento el causante devengaba mensualmente la suma de \$ 241.900 y estuvo vinculado al sistema de seguridad social de la Policía Nacional por un periodo nueve años, cuatro meses y veinte días, equivalente a 484 semanas.

En el folio N° 9 de la sentencia de primera Instancia proferida el 7 de diciembre de 2015, se determinó el sustento legal de la prestación pensional en los siguientes términos:

(...) A título de restablecimiento del derecho se ordenará que se reconozca a las demandantes la pensión de sobrevivientes que se haya causado, en la cuantía que resulte de conformidad con lo previsto en el artículo 48 inciso 2 de la Ley 100 de 1993, por el fallecimiento del señor JAIR CASTRO OCAMPO (...)

A su turno, el inciso 2 del artículo 48 de la Ley 100 de 1993 establece lo siguiente:

(...) El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación

En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley. (...)

En aplicación de los anteriores preceptos, se tiene que el periodo de vinculación del causante con la Policía Nacional equivale a un periodo de cotización de 484 semanas, motivo por el cual el monto de la mesada pensional se debía calcular en principio sobre el 45% del ingreso base de liquidación que corresponde a \$ 241.900, operación que arroja como resultado la suma de \$ 108.855.

Sin embargo, éste último valor resulta inferior al monto del salario mínimo mensual vigente para el año de fallecimiento del causante que ascendía a \$142.125.

En consecuencia y teniendo en cuenta la prohibición consagrada en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, según la cual en ningún evento el monto de la pensión de sobrevivientes podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigentes, se tiene que en el presente caso la mesada pensional a reconocer a favor de las accionantes corresponde al valor de este ítem.

En conclusión, se advierte que en el caso concreto la estimación de los perjuicios moratorios encuentra fundamento en los parámetros probatorios y normativos fijados en las sentencias que constituyen el título base de ejecución motivo por el cual se procederá a librar mandamiento de pago por las sumas de dinero especificadas bajo la gravedad del juramento y conforme a lo señalado por el artículo 433 del CGP según el cual *“el juez ordenará al deudor que se ejecute el hecho dentro del plazo prudencial que le señale y librará ejecución por los perjuicios moratorios cuando se hubieren pedido en la demanda”*.

Por lo anteriormente expuesto, libraré mandamiento ejecutivo por las siguientes obligaciones:

Dentro del plazo prudencial de veinte (20) días la Nación Ministerio de Defensa - Policía Nacional deberá proferir un acto administrativo por medio del cual se reconozca una pensión de sobrevivientes a favor de la señora MARÍA DEL SOCORRO DÍAZ BERNAL, en calidad de cónyuge supérstite del causante JAIR CASTRO OCAMPO y de JAIRA MARÍA CASTRO DÍAZ en calidad de hija, a partir del 30 de mayo de 2010.

A título de perjuicios moratorios, derivados del incumplimiento de la obligación de hacer referenciada, la entidad ejecutada deberá realizar el pago de las siguientes sumas de dinero:

- Setenta y nueve millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos cinco pesos (\$ 79.358.705), correspondientes al valor de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el 30 de mayo de 2010 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia el 27 de febrero de 2018.

- Treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil noventa y dos pesos (\$ 32.458.092) correspondiente a las mesadas pensionales que la entidad ejecutada adeuda a las accionantes, desde el 28 de febrero de 2018, hasta la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva.

- Seiscientos cincuenta y tres mil setecientos seis pesos (\$ 653.706) que corresponden a las costas ordenadas en los fallos de primera y segunda instancia aprobadas mediante auto de 8 de agosto de 2018.

- Por el valor de las mesadas pensionales que se causen desde la presentación de la demanda ejecutiva hasta el cumplimiento total de la obligación.

- Teniendo en cuenta que en el presente caso la solicitud de cumplimiento de la sentencia se presentó el 3 de noviembre de 2018, con posterioridad al término de 3 meses consagrado en el artículo 192¹¹ del CPACA, el pago de los intereses moratorios causados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia se ajustará a las siguientes reglas:

Desde el 28 de febrero de 2018 hasta el 28 de mayo de 2018 y desde el 3 de noviembre de 2018 hasta la fecha del pago total de la obligación.

En consideración a lo anteriormente expuesto, este Juzgado

RESUELVE:

¹¹ Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a favor de señoras MARÍA DEL SOCORRO DÍAZ BERNAL y JAIRA MARÍA CASTRO DÍAZ por la obligación de hacer reconocida a su favor en la sentencia de 7 de septiembre de 2015 proferida en primera instancia por este Juzgado y la sentencia del 21 de febrero de 2018 expedida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso identificado con el radicado N° 76001-33-33-001-2014-00163-00.

En cumplimiento de lo anterior, dentro del plazo de veinte (20) días la Nación Ministerio de Defensa - Policía Nacional deberá proferir un acto administrativo por medio del cual se reconozca una pensión de sobrevivientes a favor de la señora MARÍA DEL SOCORRO DÍAZ BERNAL, en calidad de cónyuge supérstite del causante JAIR CASTRO OCAMPO y de JAIRA MARÍA CASTRO DÍAZ en calidad de hija, a partir del 30 de mayo de 2010 de acuerdo a lo ordenado en título base de la ejecución.

SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a favor de señoras MARÍA DEL SOCORRO DÍAZ BERNAL y JAIRA MARÍA CASTRO DÍAZ por las siguientes sumas de dinero:

2.1. Setenta y nueve millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos cinco pesos (\$ 79.358.705) correspondientes al valor de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el 30 de mayo de 2010 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia el 27 de febrero de 2018.

2.2. Treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil noventa y dos pesos (\$ 32.458.092) correspondientes a las mesadas pensionales que la entidad ejecutada adeuda a las accionantes, desde el 28 de febrero de 2018, hasta la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva.

2.3. Seiscientos cincuenta y tres mil setecientos seis pesos (\$ 653.706) que corresponden a las costas ordenadas en los fallos de primera y segunda instancia aprobadas mediante auto de 8 de agosto de 2018.

2.4. Por el valor de las mesadas pensionales que se causen desde la presentación de la demanda ejecutiva hasta el cumplimiento total de la obligación.

2.5. Por los intereses causados Desde el 28 de febrero de 2018 hasta el 28 de mayo de 2018 y desde el 3 de noviembre de 2018 hasta la fecha del pago efectivo de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA.

TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 2080 de 2021 notifíquese personalmente al representante legal de la entidad ejecutada Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional o a quien éste haya delegado la facultad de recibir notificaciones, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Se le advierte a la entidad ejecutada que dispone, a partir de la notificación personal de esta decisión, **de cinco (5) días para el pago del crédito o de diez (10) días para proponer excepciones en defensa de sus intereses**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 430, 431, 442 y 443 del CGP.

CUARTO: NOTIFÍQUESE por estado al ejecutante el presente auto de mandamiento de pago, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CPACA y 50 de la ley 2080 de 2021.

QUINTO: SE RECONOCE PERSONERÍA a la abogada MARTHA INÉS DÍAZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 30.311.889 y Tarjeta Profesional N° 94460 para que actúe en representación de la parte ejecutante, conforme al poder aportado con la demanda.

SEXTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la ley 2080 de 2021 , se ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES del presente asunto que deben enviar un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen en el curso del proceso, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

SÉPTIMO: Este juzgado acatando el deber consagrado el artículo 46 de la ley 2080 de 2021, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
mecaicedo@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

MAT.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

Firmado Por:

Paola Andrea Gartner Henao
Juez
Juzgado Administrativo
Oral 001
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

78207bff5a5b2e373ac5a363ef8c173baa4e8f59c9172efd4481eb260087873e

Documento generado en 24/11/2021 10:16:19 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>